

Disputando y Resistiendo. La experiencia de 'las comunidades en resistencia' en el sur de Bolívar (Colombia) por el control de su territorio.

Yohanna Cuervo.

Cita:

Yohanna Cuervo (2011). *Disputando y Resistiendo. La experiencia de 'las comunidades en resistencia' en el sur de Bolívar (Colombia) por el control de su territorio. IX Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-034/650>

**DISPUTANDO Y RESISTIENDO. LA EXPERIENCIA DE "LAS
COMUNIDADES EN RESISTENCIA" EN EL SUR DE BOLÍVAR (COLOMBIA)
POR EL CONTROL DE SU TERRITORIO.**

Yohanna Cuervo Sotelo.

*Socióloga Universidad Nacional de Colombia, maestranda Historia y Memoria
Universidad Nacional de la Plata.*

nanacu@gmail.com.

Resumen: La dinámica del capitalismo actual, genera complejos fenómenos de deslocalización y una nueva territorialización del proceso productivo a nivel mundial, esto trae consigo, entre otras cosas, la búsqueda de nuevos territorios para la explotación de recursos naturales principalmente en países pobres, como es el caso de América Latina. Colombia no escapa de esta realidad y amplias zonas del país, pobres pero con inmensas riquezas naturales han pasado a ser el centro de intensas luchas por su apropiación territorial, por un lado el estado y las empresas transnacionales y por otro las comunidades que han encontrado diversas formas y procesos de resistencia.

Este trabajo dialoga desde la academia con la experiencia de las comunidades, como actores sociales actuantes, reconociéndoles tanto histórica como socialmente su importante papel, sus procesos de construcción y su intensa lucha. Se mostrará solo una parte de la historia de una de tantas comunidades que día a día construyen y "resisten" activamente en Colombia. Las comunidades del sur del departamento de Bolívar.

Para esto, partirá de una exposición histórica de los hechos de violencia estatal ejercidos sobre el sur de Bolívar desde el año 1995, se intentará mostrar cómo estos hechos han sido claves en la implementación de megaproyectos agroindustriales y extractivos en la región y en la represión en la zona. Así como se dará un panorama general de sus estrategias de resistencia que han sido "exitosas" por lo menos en un sentido: impedir la entrada de la empresa transnacional aunque con inmensos costos sociales.

Palabras clave: Sur de Bolívar, Comunidades en resistencia, apropiación territorial, Megaproyectos extractivos, Terrorismo de Estado

**DISPUTANDO Y RESISTIENDO. LA EXPERIENCIA DE "LAS
COMUNIDADES EN RESISTENCIA" EN EL SUR DE BOLÍVAR (COLOMBIA)
POR EL CONTROL DE SU TERRITORIO.**

“deslegitimación y desmitificación de esa historia oficial, que nos permita sustituirla por la historia real, la que lejos de ser esas líneas tersas y bonitas de dicha historia oficial positivista, se nos presenta en cambio como una historia llena de accidentes y conflictos en donde como diría Michael Foulcaut los orígenes son casi siempre innobles, y donde la afirmación de los poderes dominantes solo se da sobre la negación y sometimiento de las clases dominadas, mediante el recurso indiscriminado de la violencia, al saqueo, a la destrucción, al aniquilamiento y apabullamiento del oponente” (Aguirre 2010) ¹

Para iniciar esta presentación aclararemos que los hechos ocurridos en la región del sur de Bolívar (que son una muestra de lo que pasa en todo el territorio nacional) los analizaremos desde un enfoque particular, aquel que reconoce la existencia de prácticas de “terrorismo de estado” en el país. Este enfoque, aunque no desconoce la existencia del conflicto armado, pone en el centro del análisis al Estado colombiano, como un actor fundamental en el devenir histórico y en la configuración de estos escenarios de violencia hacia las comunidades, analizando su responsabilidad en la comisión de los hechos ya sea por acción directa (a través de sus agentes) o por omisión consciente de sus deberes con la población. Esto por supuesto es una decisión política para la realización de este análisis y así será asumida a lo largo del trabajo.

A nivel nacional, distintas organizaciones sociales, han sido el blanco de políticas altamente represivas, sin embargo, esta represión ha adoptado diversas formas y así mismo ha sido “justificada” con gran diversidad de estrategias discursivas y mediáticas, esto a pesar de ser una realidad actual no es una realidad nueva, así por ejemplo en la década de los 80, en consonancia con las recomendaciones de Estados Unidos, se implementa la estrategia paramilitar, como estrategia de Estado para acallar el auge de movimientos sociales en el país y para posibilitar la profundización del sistema capitalista en general en América Latina, “controlando” la gran oposición social existente. Esta situación responde no solo a una situación interna, sino que va de la mano con el contexto internacional enmarcado en la guerra fría.

Así mismo, el discurso se revistió con la bandera de la lucha contra el comunismo y las propuestas socialistas, con la idea de “quitarle el agua al pez” y frenar el influjo de movimientos revolucionarios en América Latina y el escenario abierto con la revolución Cubana. Poco a poco y después de la caída del muro de Berlín, se experimenta un desplazamiento del centro del ataque de la política internacional, sin con esto decir que se dejó de combatir a los movimientos con posturas de izquierda, el discurso encontró un nuevo enemigo interno: “las drogas”, en un comienzo la marihuana, después el opio y por último la cocaína, configuran el escenario de confrontación internacional. Para el caso colombiano la lucha antidrogas se ve reforzado con una gran cantidad de programas institucionales y de ayuda extranjera como es el caso del plan

Colombia, iniciado bajo el gobierno de Andrés Pastrana. Este plan, altamente publicitado como un plan de ayuda para el desarrollo del país, ha sido aplicado bajo gran cantidad de críticas que sostienen que sus objetivos son mucho más militares que sociales.

El 11 de septiembre 2001, plantearía un importante salto cualitativo en cuanto a la ubicación de un “nuevo” enemigo: el terrorismo, y así los esfuerzos internacionales encabezados por la política exterior de Estado Unidos ubicaron en todo el mundo sus enemigos, en el caso Colombiano, el terrorismo empezó a estar a la orden del día, encarnado principalmente en los grupos subversivos renombrados desde este momento como grupos terroristas, logrando así eclipsar sus móviles políticos y posibilitando un nuevo trato privilegiado frente a estos: La vía militar. Pero los límites del terrorismo se hacían cada vez más difusos y gran cantidad de acciones y comportamientos empiezan a ser calificados como posibles actos “terroristas”. En uno y otro lugar esta lucha posibilitó el ingreso por la vía militar y paramilitar a territorios estratégicos en términos económicos.

Esto trajo consigo a nivel discursivo y mediático, el relacionamiento de las acciones de las organizaciones sociales con acciones terroristas, así todas las acciones de oposición o de protesta, sufrieron por un lado, una criminalización y por otro, una creciente estigmatización, tratando de ilegitimarlas ante la opinión pública.

Una segunda relación se ha establecido, con consecuencias similares: relacionar al narcotráfico con el terrorismo, de esta forma se posibilitó la criminalización del cultivo de coca, principalmente llevado por pequeños campesinos, sin tener en cuenta, por un lado las condiciones que llevan o que han impulsado al campesinado a este tipo de cultivos y por otro, que el gran poderío de este negocio y sus ganancias no se encuentran mayoritariamente en su cultivo sino en su comercio, el cual es manejado en su mayoría por grupos paramilitares.

Así, amplias capas de la población campesina resultan señaladas de narcotraficantes y las acciones en contra del “narcoterrorismo” son legitimadas en la opinión pública. Dentro de estas acciones se encuentra las controvertidas fumigaciones con glifosato, las cuales han dejado graves daños ambientales y han afectado no solo los cultivos de coca, sino en general la producción agrícola campesina local, generando una grave crisis alimentaria y el desplazamiento forzado de la población.

Es de anotar, que los programas institucionales y militares que están en la vía de esta “lucha” se realizan en su mayoría en regiones con un gran potencial en términos de recursos naturales, complejizando aun más la situación, pues a lo anterior se suma la criminalización de actividades económicas realizadas en pequeña escala por las comunidades, para privilegiar la estrada de grandes intereses económicos, como es el caso de la pequeña minería en contraposición con la minería a cielo abierto propuesta por grandes empresas transnacionales, un ejemplo claro de esto es precisamente la región del Sur de Bolívar.

En uno y en otro momento, este discurso que encuentra enemigos hacia los cuales el Estado colombiano enfila sus acciones violentas e institucionales, debería coincidir con los resultados de estas acciones en el territorio nacional y con los objetivos de las mismas en términos reales, es decir en como estas acciones son vividas, ejercidas y desarrolladas en el territorio nacional, es precisamente en esa realidad donde intentaremos mostrar los alcances y efectos de las acciones que el Estado ha emprendido en el marco de estos discursos.

I. El sur de Bolívar en Colombia. Breve contexto.

La región sur del departamento de Bolívar en Colombia, ubicada hacia la costa norte y entre los dos ríos más importantes del país -El río Cauca y el río Magdalena-, en la actualidad es una región habitada por una población proveniente de varias regiones del país, pues ha sido configurada históricamente por distintos momentos de desplazamiento interno y oleadas sucesivas de colonización.

El desplazamiento interno ha sido el fruto, en su gran mayoría, de periodos de violencia política que expulsan pobladores de otras regiones, quienes encuentran refugio en esta zona relativamente lejana y de difícil acceso². Esto la hace una región forjada por la resistencia, no solo de estos nuevos colonos frente a la conflictividad y violencia del país, sino también una férrea resistencia y voluntad de forjar sus medios de vida, en medio de condiciones precarias y con poco apoyo social por parte del gobierno nacional y departamental..

Esta región se convirtió en el lugar en el que miles de personas pudieron hacer parte de una actividad productiva, en su mayoría de subsistencia. Han sido varias, estas actividades productivas que también han atraído migración hacia la región, configurando así su composición social, la minería es una de las más importantes, pues data desde la época de la colonia con el descubrimiento de algunas minas en la zona de Guamoco y es actualmente vital, tanto para la economía, como para entender la configuración de la lucha de clases en la región.

Una región geográficamente privilegiada: donde zonas de selva húmeda ecuatorial, con amplios cuerpos de agua y una gran cantidad de recursos naturales, en un terreno marcado por la serranía de San Lucas -finalizando la cordillera central-, la hacen inmensamente rica y a la vez marca difíciles condiciones para su colonización y acceso. Esto contrasta, con zonas planas y muy fértiles a las orillas del río Magdalena, las cuales históricamente han estado mucho más integradas a la vida nacional, al ser este río por mucho tiempo la principal vía del transporte y el comercio fluvial en el país³. Cascos urbanos como San Pablo y Santa Rosa funcionan como claros ejes comerciales y centros de acopio de mercancías e insumos para ese sur de Bolívar que subiendo hacia la serranía y hacia la supervivencia de miles de pobladores, se aleja del apoyo institucional y de cierto nivel de desarrollo social.

Importantes procesos organizativos se han tenido en la región, en donde los habitantes han intentado mejorar sus condiciones materiales de vida a través del trabajo colectivo y la exigencia de sus derechos ante el Estado, luchas campesinas por la tenencia de la tierra bajo la consigna “tierra pal que la trabaja” abrieron camino para un desarrollo importante de las organizaciones sociales en la región, en donde son un actor fundamental en su construcción, de esta historia vamos a resaltar el periodo comprendido entre 1995 y 2009, separados por periodos de tiempo de acuerdo a hechos que marcan la dinámica regional, los cuales configuran saltos cualitativos para la comprensión de la dinámica y las contradicciones territoriales.

II. La lucha por la Vida y el Territorio de las comunidades en resistencia. 1995. 1999.

Las primeras movilizaciones regionales y el éxodo campesino.

Este periodo, está marcado por una gran cantidad de movilizaciones regionales en las que básicamente las comunidades demandaban, del gobierno local y regional, la atención a sus necesidades básicas, dadas las condiciones de extrema pobreza en la zona, sus principales demandas giraban en torno a la construcción de escuelas y puesto de salud, así como generación de infraestructura y programas que permitieran tener mejores condiciones de vida a los habitantes.

Las movilizaciones de esencia campesina, buscaban mejoras en las condiciones de la región y denunciaban algunos desplazamientos de la zona por el conflicto armado y la estigmatización de que eran sujetos, a través del señalamiento de sus movilizaciones como actos de la subversión.

En esta vía, sus preocupaciones también evidenciaban, como el gobierno había realizado una gran cantidad de acuerdos los cuales no estaban siendo cumplidos. Hacia 1997, los campesinos empezaron a denunciar la existencia de grupos paramilitares. Precisamente en este año el diario el Tiempo registraba así las demandas de los campesinos en una acción de movilización en la ciudad de Cartagena.(capital departamental)

“Los campesinos insisten en cuatro puntos básicos: garantías a la vida de los habitantes del sur de Bolívar, que se revise la política de explotación minera del país, que se defina qué sucedió con los recursos que el Gobierno dice haber entregado en cumplimiento de los acuerdos del 94, y que se les garantice un retorno seguro a sus municipios de origen. Indican que para el cumplimiento del primer punto se requiere, antes que todo, que el Gobierno decida combatir con energía a los grupos paramilitares que operan en Bolívar. El paramilitarismo en un perro rabioso que está fuera de control; se les ha salido de las manos a los que lo engendraron y les dieron sus armas , dijo el vocero de los campesinos y de los mineros, Henry Montenegro, en una reunión previa a los diálogos de ayer” (Archivo de El Tiempo, 1997)⁴

Hacia 1998 se realiza la primera Gran movilización, en la que más de 2000 campesinos y mineros se desplazaron hacia los cascos urbanos de la región, (Morales, San Pablo y la ciudad de Barrancabermeja) y hacia la capital del país, la ciudad de Bogotá en el llamado “éxodo campesino del sur de Bolívar” con el fin de exigir, de nuevo, pero esta vez ante el gobierno nacional, soluciones hacia sus problemáticas y protección ante la inminente arremetida paramilitar en la zona.

El respeto a la vida empieza ahora a hacer parte importante de sus exigencias, obligados por las constantes amenazas, robos, los asesinatos selectivos y las primeras masacres paramilitares en la zona, especialmente en los municipios de Tiquisio, Altos del rosario y Barranco de loba que en 1997 dejaron alrededor de 50 víctimas y en 1998 duplicaron este número⁵ y el asesinato del presidente de la asociación de Mineros de Rio Viejo Luis Orlando Camaño y más de 30 mineros.

En tres meses y medio de movilización, los campesinos denunciaron públicamente, la connivencia de los grupos paramilitares y la fuerza pública. El éxodo dio paso a un debate en los medios de comunicación, tanto regionales como nacionales, en los que la mayoría de las veces señalaban a los campesinos como “marchistas auspiciados por la guerrilla” como lo demuestra estas notas del diario El Tiempo:

“la Gobernación considera que ellos son marchistas antes que desplazados. No se trata de un juego de palabras, dijo el Secretario de Interior y explicó que las condiciones por las que se movilizan los marchistas son distintas a las que impulsan a los desplazados a dejar sus tierras. Los primeros son utilizados como punta de lanza por la guerrilla para que marchen hacia los centros urbanos con el fin de presionar al gobierno por la presencia de los mal llamados paramilitares en la región, mientras que los segundos--los desplazados--vienen huyendo de los combates que se libran en sus lugares de origen o por las malas condiciones económicas que padecen; sostuvo el funcionario. Arrázola Juliao informó que los marchistas tendrán que pedir autorización a los alcaldes para movilizarse....Si no cuentan con el debido permiso, las autoridades competentes policivas del lugar están facultadas para reprimir cualquier movilización de esta naturaleza señaló e insistió en que detrás de esta movilización no existe más que la intención de la guerrilla de que el gobierno se encargue de sacar a los paramilitares de la zona y quedar ellos reinando en las zonas que han sido tradicionalmente de su dominio , agregó.”(Archivo de “el tiempo” 1998)⁶

Finalmente el 4 de octubre de 1998 el gobierno nacional, en cabeza del presidente Andrés Pastrana Arango, firma con las comunidades desplazadas unos acuerdos cuyos puntos principales fueron: “rechaza, condena y repudia, la presencia pública abierta y permanente de los grupos paramilitares en esta región y se compromete a combatir la asociación entre agentes del estado y los grupos paramilitares”⁷; se compromete a prohibir el financiamiento de estos grupos por empresas y particulares; brindar las garantías para el retorno de las comunidades a sus zonas de origen y reconstruir las viviendas incendiadas en las incursiones paramilitares ocurridas en la región. Así mismo, el gobierno se

comprometió a iniciar con las comunidades un proceso de construcción y ejecución del Plan de Desarrollo y Protección integral de los derechos humanos en el Magdalena Medio, plan de desarrollo en el cual las comunidades participarían activamente en la formulación de planes, programas y proyectos que avanzarían en la solución de las problemáticas sociales y económicas de la región.

En este periodo, se dan dos saltos cualitativos importantes en términos de la construcción del discurso político por parte de las organizaciones sociales, a partir de 1998 el centro de las movilizaciones no son más reivindicaciones coyunturales o materiales, la defensa de la vida empieza a estar en primer orden y con esto comienza la reflexión de lo que significa “la vida” para las comunidades, en su dinámica comunitaria y organizativa se discute sobre las condiciones que se deben tener para una vida digna. Esto también se ve fortalecido por la amenaza muy cercana del desplazamiento, esta amenaza propicia la reflexión acerca de cómo el desplazamiento no solo afecta su relación con la tierra (la cual ocupaba el centro de las reivindicaciones campesinas durante los 60 a 80) comienza a introducir en las discusiones de las comunidades, la reflexión sobre el espacio que han ocupado, su historia y como culturalmente se sienten identificados con él. Esta es una de sus primeras reflexiones sobre el territorio.

Por otro lado, el éxodo de 1998 visibilizó a las comunidades rurales del sur de Bolívar a nivel nacional, las acciones de los campesinos en ciudades como Bogotá en la cual estuvieron asentados en dos grupos en la universidad nacional de Colombia y realizando una toma a la embajada de Estados Unidos, permitió su diálogo con otras organizaciones, ya no solo de su región sino del nivel Nacional, con las que se empieza un proceso de construcción que contribuye a la cualificación de su discurso y práctica política.

En el discurso oficial en este periodo los grupos paramilitares no eran reconocidos y mucho menos su relación con la fuerza pública, la región era vista como una región muy violenta producto de la presencia de los grupos guerrilleros. La existencia de cultivos de uso ilícito empezó a aparecer fuertemente en las notas periodísticas sobre la zona, sin datos concretos, pero a través de esta se fue justificando poco a poco la necesidad de la aplicación del Plan Colombia en esta región.

III 1999-2003. El bloqueo y la caravana internacional por la vida en el sur de Bolívar.

Después del retorno de las comunidades del éxodo campesino del sur de Bolívar, la situación de violencia se acrecentó aun más, las arremetidas militares-paramilitares no cesaron y el gobierno no cumplió ninguno de los acuerdos pactados, de hecho el proceso de construcción del plan de desarrollo y protección de los derechos humanos, tuvo que ser suspendida por los asesinatos selectivos en contra quienes participaban del proceso.

Las listas de los participantes del éxodo tomadas por la red de solidaridad social para supuestas ayudas al retorno⁸ aparecen en manos de los grupos

paramilitares y con estas empiezan a asesinar a los líderes de la movilización. En noviembre de 1999 es asesinado el presidente de la FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR, organización social antes llamada Asoagromisbol (a mediados de los 80) conformada por campesinos y mineros que hasta ahora habían protagonizado las acciones de protesta y exigencia. EDGAR QUIROGA había sido uno de los voceros en el éxodo por las comunidades, fue detenido y desaparecido por grupos paramilitares junto a Gildardo Fuentes en momentos en los que retornaban a la región, después de haber realizado la denuncia sobre las torturas sufridas por este último a manos de grupos paramilitares.

Durante muchos años, las actividades comunitarias se vieron disminuidas debido a la constante represión ejercida por parte de los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. Muchos líderes fueron asesinados, desplazados o desaparecidos, muchas veces en el marco de grandes operaciones militares en la zona. Los cascos urbanos de la región, eran totalmente controlados por grupos paramilitares y para poder salir de la zona rural, sus habitantes tenían que someterse a jornadas muy largas de camino y llegar a algún lugar seguro que les permitiera comunicar la situación que vivían las comunidades. Así mismo las masacres continuaron, una de las más recordadas la del municipio de San Pablo el 8 de enero de 1999 en la que murieron 14 personas: de 1999 incursionó al casco urbano del municipio de San Pablo un grupo de paramilitares, asesinando

“El 8 de enero de 1999, incursiono en el caso urbano del municipio de San Pablo un grupo de paramilitares, los cuales asesinaron a 14 de sus pobladores e hiriendo otros tres. Los paramilitares llegaron, hacia la media noche, por el río Magdalena en dos embarcaciones. Con lista en mano llegaron al billar “Puerto Amor” y a la fuente de soda “El Paraíso” los cuales se encuentra a menos de 50 metros de la Estación de Policía en donde asesinaron a once personas. Luego forzaron la entrada de la fuente de soda “El Espejo”, en donde asesinaron tres personas e hirieron gravemente a otras tres”(fedegromisbol 2009)⁹

La producción de alimentos de la región, fue deteriorada por el permanente bloqueo económico ejercido por la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, estaba prohibido el ingreso de alimentos, de insumos agrícolas y de medicamentos. Así mismo las constantes fumigaciones indiscriminadas, en el marco del Plan Colombia, destruyeron la poca reserva alimentaria que las comunidades tenían, pues los cultivos de pancoger fueron exterminados. Como respuesta FEDEAGROMISBOL junto a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales desarrollaron esfuerzos para visibilizar la situación de estas comunidades y llevar mediante acciones humanitarias provisiones de alimentos y medicamentos, al mismo tiempo que se intentaba romper el bloqueo de la zona. Así se realiza la caravana Internacional por la vida en el sur de Bolívar.

IIIa. La Caravana Internacional por la vida en el Sur de Bolívar.

Esta acción tuvo lugar del 1 al 21 de agosto de 2001, en esta caravana participaron 60 delegados de organizaciones internacionales y nacionales quienes hicieron presencia en la región, para comprobar las difíciles condiciones de vida de los habitantes de las comunidades, dadas por el bloqueo y control absoluto de los caseríos de la zona rural.

Esta iniciativa tuvo gran repercusión, fue recogida por todos los medios de comunicación; prensa escrita, radios y televisión, nacionales e internacionales. Esta importante cobertura informativa permitió que todos los sectores de la sociedad colombiana tuvieran conocimiento de la iniciativa y de sus objetivos, manifestando posiciones distintas frente a ella y alimentando un debate sobre la situación de la región. La caravana aunque con obstáculos por parte de la fuerza pública, logro visitar 5 corregimientos y 3 municipios al final de la cual, en un comunicado de prensa afirmaba “la caravana internacional por la vida en el sur de Bolívar, pudo constatar que después del éxodo de 1998 y a pesar de los acuerdos firmados por el gobierno nacional, las comunidades se encuentran bajo un cerco político, militar e informático y que la situación de los habitantes es de extrema pobreza”

III.b El Tribunal Internacional de Opinión para Sur de Bolívar.

Otra de las acciones de visibilización, que las organizaciones emprendieron en este contexto fue El Tribunal Internacional de Opinión como instrumentos internacionales de justicia popular que apuntó a juzgar los Crímenes de Lesa Humanidad llevados a cabo en esta región, el cual sesionó en París (Francia) el 28 y 29 de noviembre de 2003.

Este Tribunal se constituyó por la denuncia presentada por las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos y populares agrupadas bajo la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, la Mesa Regional del Magdalena Medio, Corporación Sembrar, la Campaña Permanente contra la Impunidad “Colombia Clama Justicia” y La Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

“El Tribunal tuvo la evidencia documental de más de 209 casos de violaciones de derechos humanos ocurridas en esta región entre 1996 y 1999. Al finalizar el Tribunal, manifestó que se pudieron comprobar múltiples masacres, asesinatos, detenciones y desapariciones forzadas, torturas, amenazas, lesiones, allanamientos sin orden judicial, destrucción de cultivos, desplazamientos forzosos y actos de barbarie cumplidos como ejecución de un plan generalizado y sistemático contra la población. Todos estos hechos respaldados y corroborados a través de testimonios, peritajes y evidencias documentales”. (Tribunal Internacional de Opinión 2003)

Mientras estas actividades trataban de visibilizar la región a nivel nacional e internacional, a nivel local, las comunidades y sus organizaciones, a pesar del contexto de terror en el que se vivían, encuentran una respuesta fundamental que marcará la forma de afrontar esta estrategia de terrorismo de estado en la región. Así las comunidades deciden “ No salir más, pero tampoco dejarse matar”¹⁰ constituyéndose así como “Comunidades en resistencia” por un lado,

negándose al desplazamiento y buscando refugio en las zonas selváticas en el momento de las incursiones paramilitares y volviendo después que estos dejaban los caseríos para volver a reconstruirlos y seguir resistiendo allí¹¹ y por otro lado, generando propuestas de desarrollo alimentario como respuesta a la crisis alimentaria y al bloqueo. De esta manera las reflexiones frente al territorio y esta construcción de la resistencia en el mismo, los llevan a introducir el elemento territorial en sus exigencias y planteamientos políticos como uno de sus ejes fundamentales.

III. 2004-2006 los intereses transnacionales, la pugna por el territorio.

La dinámica organizativa de las comunidades va dando sus frutos pues la mirada de una parte de la comunidad internacional y el potencial organizativo de las comunidades en resistencia, logran bajar el nivel de terror en la región, así poco a poco las comunidades rurales pueden volver a salir a los cascos urbanos.

A pesar que, en los anteriores años el tema de la minería y los intereses sobre esta existían, es en este periodo en el que se hace más evidente. La inmensa riqueza aurífera de la región atrae grandes capitales y poco a poco las acciones represivas del estado iban acompañadas con sentencias de la inminente llegada de una gran empresa a la que sus pobladores : "no debían oponerse", esto lo señalan varios testimonios recogidos en la zona minera que señalan, como los paramilitares y el ejército proclamaban directamente la necesidad de la entrada de las grandes empresas en la zona.

En los últimos años, para el gobierno colombiano, el pilar del crecimiento económico nacional ha sido "la confianza inversionista", especialmente en reglones como la minería y la explotación petrolera. De esta forma la economía nacional se ha volcado hacia el sector de la explotación de los recursos naturales y minero energéticos realizada en la mayoría de las ocasiones por empresas transnacionales, atraídas por las amplias ventajas que el gobierno colombiano ha implementado, para hacer cada vez mas "seguras" estas inversiones y a la vez más rentables. (Corporación Sembrar 2004)

Estos territorios, que hasta este momento estaban relegados y poco tenidos en cuenta tanto por el Estado como por la lógica productiva, han sido como hemos visto hasta ahora, históricamente el territorio de vastas comunidades que hacen de ellos su hogar, lo construyen y son construidas por las relaciones que en él se dan. Es aquí precisamente, donde podemos ver como estos territorios, en este caso el sur de Bolívar, se convierten en territorios "en disputa", las organizaciones sociales y comunidades por un lado, los grandes agentes del gran capital transnacional o nacional de otro.

"Son dos formas de apropiación territorial que se superponen espacialmente, con distintos usos del suelo, formas de incorporar los recursos y maneras de transformación de la naturaleza. De acuerdo al contexto de cada país, las empresas transnacionales y los grandes grupos nacionales, tienen el poder de someter gobiernos locales, adaptar a su favor el aparato jurídico, ideológico y

militar de una nación, con tal de acceder a un territorio en particular y desplazar las poblaciones asentadas en áreas de carácter geoestratégico para ellas”(Villamil 2010).

En ese sentido las multinacionales han acechado los recursos naturales que posee la región, en un afán de apoderarse de los grandes yacimientos auríferos de la zona, en donde se produce aproximadamente el 42% del oro del país. Empresas como La Corona Golfields de origen Canadiense y subsidiaria de la norteamericana Conquistador Mines, la Sur American Gold Corporation, inscritas en la Bolsa de Canadá, la Normandy Mining y la Archangel; estuvieron seriamente interesadas en lograr la exploración y explotación de las minas del Sur de Bolívar.(sintramintercol 2004) .

En los últimos años la presión ha sido ejercida por la empresa Anglo Gold Ashanti, que desde el año 2004, dio inicio a la presentación de solicitudes de concesión de extensos territorios en el Sur de Bolívar,(en un comienzo bajo el nombre de Sociedad Khedada) a fin de adelantar procesos de explotación minera en la región. Los terrenos respecto de los cuales solicito Kedahda S.A. contratos de explotación, son de una extensión de terreno que supera las 520.093 hectáreas, lo que implica casi la totalidad del Sur de Bolívar. La actuación de esta Transnacional se ve favorecida por las reformas que fueron promovidas desde finales de la década del 90, reformas que plantean una eliminación de la pequeña minería y a su vez el otorgamiento de garantías para la presencia y participación en el proceso de explotación por parte de empresas transnacionales.

Poco a poco para los pobladores fue evidente la relación entre estos intereses económicos y las acciones represivas adelantadas por el Estado a través de la fuerza pública y los grupos paramilitares, la intención de atemorizar y desplazar a los pobladores para poder adelantar la explotación explicó y le dio mayor sentido la lógica represiva vivida hasta ahora. Así podemos dilucidar explicaciones de carácter estructural y no coyuntural que permiten ver la contradicción entre intereses de distintas clase sociales en la región, en donde la lucha por el territorio visibilizó claramente la existencia de dos clases sociales distintas y en con intereses contrapuestos, por un lado las clases dominantes, representadas en grandes capitales nacionales y transnacionales defendidas y agenciadas por el Estado y por otro lado las comunidades locales quienes construían y defendían su territorio desde una situación de dominación y vulneración de todos su derechos.

IV. 2006-2010. La persecución y el nuevo conflicto por la tierra y el territorio

En el marco de esta clara disputa territorial, las organizaciones sociales tienen un proceso importante de crecimiento y visibilización nacional, estableciendo escenarios de dialogo y de interlocución en dos niveles, a nivel organizativo entre expresiones sociales, organizaciones no gubernamentales acompañantes y sectores de la iglesia presente en la región y por otro lado estableciendo una

mesa de interlocución con el gobierno nacional y departamental para analizar y exigir sobre sus problemáticas y derechos.

Este crecimiento en consonancia con la oposición de las comunidades de la zona a la entrada de la empresa transnacional, (gracias a gran cantidad de actividades de reflexión emprendidas por estas instancias de coordinación), no es visto con buenos ojos por parte del gobierno nacional, la fuerza pública y por supuesto la empresa transnacional. Así lo expresaba el diario el espectador:

“El único obstáculo para el negocio fue Fedegromisbol. El propio vicepresidente de la multinacional, Rafael Alfonso, reconoció que, después de tres reuniones llevadas a cabo en Bogotá, sus miembros fueron los únicos que públicamente expresaron desacuerdo en realizar negocios con la empresa. ...entre los que más protestaron estaban Teófilo Acuña y Alejandro Uribe.... Ellos no sólo se opusieron radicalmente a los proyectos de la multinacional sino que además denunciaron que miembros del Batallón Nueva Granada estaban realizando retenes y bloqueos en las vías conducentes a las minas, donde exhortaban a los pobladores a permitir la entrada de la Anglo Gold a la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar” (archivo del espectador, 2008)¹²

Esto aumentó, la campaña de estigmatización y criminalización de las organizaciones sociales emprendida por la fuerza pública y el discurso oficial, un ejemplo concreto, ocurrió el 20 de septiembre de 2006, cuando el líder minero, Alejandro Uribe Chacon, es asesinado por miembros del ejército nacional cerca a su vereda y posteriormente es presentado como guerrillero muerto en combate¹³. Las masivas protestas de los campesinos y mineros de la zona que duraron más de un mes, y las constantes amenazas y hostigamientos a las mismas, hicieron evidente la relación entre este asesinato y la oposición de las comunidades, a la entrada de las empresas transnacionales en la zona.

Los hostigamientos, señalamientos y persecución a los líderes de las organizaciones sociales en la zona, continuaron meses después de este asesinato Teofilo Acuña, presidente de FEDEAGROMISBOL fue detenido por la fuerza pública. Fue necesaria una gran campaña mediática nacional e internacional para que fuera liberado días después.

“Meses después, el presidente de Fedegromisbol, Teófilo Acuña, una persona que según monseñor Gómez Serna “ha trabajado por el bien de la comunidad y que no está involucrado con actores armados”, fue capturado por el Ejército con cargo de sedición. A los pocos días fue liberado. Un reporte de inteligencia señala a Acuña también como guerrillero del Eln, con el alias de ‘Téofilo’, y se dice que en una reunión en la vereda de Buena Señá, “le manifestó a la comunidad que no se podía permitir la entrada de la multinacional Kedahda”. ¿Por qué aparecían las reuniones de protesta contra la Anglo Gold en los informes de inteligencia del Batallón Nueva Granada?”(Archivo el espectador 2008)

En este mismo periodo otro interés de las clases dominantes se hizo evidente y con él dos elementos más, por un lado, cómo el desplazamiento forzado de

miles de habitantes en años anteriores iba a ser aprovechado, y por otro la forma como se acrecentaría la presión por el despojo de los campesinos frente a su territorio. Siguiendo las tendencias internacionales, la orientación de las políticas agrarias en Colombia, dio un viraje hacia el apoyo de grandes plantaciones de monocultivos agroindustriales, dejando atrás la producción y el abastecimiento de alimentos.

Es así como, para el caso del sur de Bolívar los programas están orientados a la implementación de grandes extensiones para el cultivo de palma de aceite, de esta forma sus municipios fueron caracterizados por las entidades y programas gubernamentales, como tierras con un alto potencial para este cultivo agroindustrial, aprovechando también su privilegiada ubicación a orillas del río Magdalena, lo que facilita las exportaciones de dicho producto. Grandes extensiones abandonadas gracias a la violencia fueron sembradas con este cultivo a la vez que, bajo varias estrategias en las que se encuentran de nuevo las amenazas y la violencia paramilitar, empiezan a ser desplazadas varias comunidades campesinas.

Los efectos ambientales y sociales de este tipo de cultivos ya han empezado a sentirse con fuerza en la región y los campesinos han empezado a movilizarse y tratar de encontrar salidas a esta problemática que empeora aun más, sus ya difíciles condiciones.

Uno de los casos más nombrados de esta problemática es la situación que afrontan 123 familias que han sido desalojadas de la hacienda Las Pavas en el municipio del Peñón, desalojo realizado por la fuerza Pública, mediante la utilización de la violencia en enero de 2010. El grupo empresarial Daabon ha sido cuestionado por la comunidad nacional e internacional por este despojo hacia los campesinos, incluso recientemente la cadena de almacenes ingleses "the Body Shop" suspendió sus negocios con este grupo después de verificar las condiciones como habían sido obtenidas sus tierras. Este interés de grandes grupos agroindustriales, favorecido por el gobierno por cuestionados programas como el llamado "agroingreso seguro"¹⁴ complejiza aun más la disputa territorial de la región en la que evidentemente los campesinos y mineros son actores fundamentales con sus acciones y propuestas.

V. Consideraciones Finales.

Para finalizar propondré cuatro puntos sobre los cuales podría ser interesante mayor profundización:

- En el marco del presente texto hemos mostrado algunas de las acciones ejercidas por el estado en la región, acciones que afectan directamente la vida y dignidad de las comunidades que allí habitan, así podemos ver como prácticas de terrorismo de estado han sido aplicadas. Las similitudes con los hechos ocurridos en países en los que formalmente se encontraban regímenes dictatoriales son muchas, por esto asumimos como adecuados para explicar

los hechos ocurridos, los siguientes aspectos formulados para analizar el terrorismo de Estado en Argentina en donde se concibe como:

“la administración de la violencia por parte de la institución que detenta es sus manos el monopolio legal y legítimo de la violencia y que, en determinadas coyunturas, incurre en un conjunto de acciones represivas ilegales e ilegítimas, violatorias de los derechos humanos, como respuesta a las directivas emanadas de quienes ocupan las más altas posiciones en la estructura de los aparatos estatales....el modus operandi del terrorismo de estado es la violencia- a través de la represión, el secuestro, la desaparición, la tortura física o psicológica, el asesinato- por parte de las instituciones públicas.....no contentos con ello, la historia nos ha demostrado que los dictadores en el poder crean instituciones parapoliciales y paramilitares que actúan en la más absoluta impunidad.... El terrorismo de Estado es una forma de violencia que tiene su sustento estructural en dicha institución y eso la contradistingue de cualquier otra forma de violencia ensayada por cualquier grupo u organización de la sociedad. (Boron 2010)

- El afán por el control territorial de la zona y del saqueo de sus recursos naturales, ha convertido al sur de Bolívar en un territorio en disputa en el que el Estado, los terratenientes locales y los grandes capitales nacionales y extranjeros se han valido de una estrategia de Terrorismo de Estado para su apropiación y control. Sin embargo, las comunidades y organizaciones sociales de la zona pese a la magnitud de estas estrategias de control social (tanto violentas como mediáticas) han logrado ejercer acciones que contrarrestan y resisten esta violencia, convirtiéndose en actores políticos y sociales fundamentales en la conformación de este territorio en Disputa, que además apropian y construyen día a día. Así podemos analizar lo ocurrido desde un marco de lucha de clases, pues aunque algunos afirman esta ya se encuentra “pasado de moda” la realidad como vemos no asume como ciertos estas afirmaciones y nos demuestra no solo su vigencia sino su necesidad.
- Es interesante también, ante esta realidad, introducir el debate frente a la contradicción entre los discursos políticos que sustentan las acciones estatales y tanto su coherencia misma, con los resultados obtenidos, como su relación con los mecanismos utilizados para su supuesta “consecución” un ejemplo de esta contradicción, la vemos en la obstinación del Estado colombiano por mantener las fumigaciones con glifosato en la zona, a pesar de los daños ambientales producidos y de la crisis agroalimentaria en la que ha sumido la zona. Esto nos traerá muchos cuestionamientos frente a los objetivos que persiguen este tipo de acciones y su relación con los objetivos de control y apropiación territorial por parte de los grandes capitales.
- Para finalizar quisiera resaltar el proceso de construcción de las comunidades en este contexto, pues se hace evidente como la realidad misma en la que llevan su vida les exige día a día, un proceso de cualificación política y un reto que dé a pocos han sabido alcanzar. La estrategia de la “resistencia” de “no irse pero tampoco dejarse matar” demuestra una vez más la valentía y coraje de las comunidades de muchas regiones en Colombia. Como esta historia muchas otras deben ser “contadas” deben emerger a la esfera pública para discutir con esa “historia” oficial que invisibiliza a gran cantidad de actores

sociales y da una versión única de la situación nacional. En la que el “otro” enemigo está en cualquier lugar y esto difumina la frontera entre lo legítimo y lo crimina

VI. Bibliografía.

Aguirre C.(2010) Walter Benjamín y las lecciones de una historia vista a contrapelo.

http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc frank benjam0022.pdf.

Boron, Bayer, Gambina. (2010) El terrorismo de Estado en la Argentina. Argentina. Instituto Espacio para la memoria.

Diario El tiempo,(1998) reprimirán Éxodos en el sur de Bolívar. 12 de agosto de 1998. Archivo. www.eltiempo.com.

Federación Agrominera del sur de Bolívar, Corporación Servicios profesionales comunitarios Sembrar. 2009. agenda de la memoria la vida y la resistencia.2009.

Maldonado J. (2008) En la serranía no Brilla el Oro. El espectador. Sábado 5 de enero de 2008

Molano J. (2006). Anglogold Ashanti. La voracidad de las multinacionales de la muerte, el saqueo y la destrucción. En: Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo Colombia. Sesión Minería. Medellín, Colombia, Noviembre 10 y 11 de 2006.

Proyecto Colombia Nunca Más.(2008) Colombia Nunca Más. Crímenes de Lesa Humanidad en la zona quinta. Bogotá. Colombia 2008.

Sintraminercol.(2004) La gran minería en Colombia: Las ganancias del exterminio. Bogotá, Colombia.

SOURDIS C. (1997) Inician Diálogos en la catedral de Cartagena. Diario El Tiempo.13 de noviembre de 1997.

Tribunal Internacional de Opinión (TIO).(2004) Dossier Jurados Caso Sur de Bolívar. 28 y 29 de noviembre. París, Francia.

Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP),(2006) Capítulo Colombia. Sesión Minería. Acercamiento al contexto de la minería en Colombia. Medellín, Colombia. Noviembre 10 y 11 de 2006.

Villamil J.(2010) Un acercamiento a las empresas transnacionales y a los megaproyectos mineros en sur América . www.redantorcha.org. Junio 2010

NOTAS

¹ Para ampliar ver Carlos Antonio Aguirre Rojas. "Walter Benjamín y las lecciones de una historia vista a contrapelo". mayo 2010. http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/benjaminw/esc_frank_benjam_0022.pdf.

² Un ejemplo claro de esto fue la violencia política generada después de 1948 con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, esta llevo a que muchos de los liberales que huían de la persecución de los conservadores se refugiaron en la región.

³ Estas zonas han estado también más marcadas por la lucha por la tierra entre campesinos y terratenientes.

⁴ Ver artículo completo Carlos A Sourdis. "Inician Diálogos en la catedral de Cartagena". *Diario El Tiempo*.13 de noviembre de 1997.

⁵ Datos obtenidos gracias a la base de datos de la Organización no gubernamental Defensora de Derechos Humanos "corporación sembrar" que ha realizado acompañamiento en la zona desde 1998 y ha logrado recopilar y sistematizar gran cantidad de testimonios de los hechos ocurridos.

⁶ "reprimirán Éxodos en el sur de Bolívar". *Diario el tiempo*.12 de agosto de 1998. Archivo. www.eltiempo.com.

⁷ Tomado del acta de acuerdos firmada con fecha el 4 de octubre de 1998 y firmada por el presidente de la Republica Andrés Pastrana y los voceros de las comunidades, entre los que se encuentran Edgar Quiroga.

⁸ Entidad gubernamental creada para tratar problemáticas sociales a nivel nacional definida por el gobierno como "La Red de Solidaridad Social es una iniciativa presidencial que convoca a la solidaridad nacional, para atender las necesidades apremiantes de los grupos de población más pobres y vulnerables del país y facilitar su participación en los grandes programas sociales".

⁹ Tomado de "agenda de la memoria la vida y la resistencia.2009" realizada por la Federación Agrominera del sur de Bolívar y la corporación Sembrar.

¹⁰ Testimonio líder regional

¹¹ De hecho algunos caseríos en los municipios fueron quemados y reconstruidos más de cinco veces, este es el caso de los caseríos de vallecito en San Pablo y Paraíso en Simití.

¹² Ver el articulo completo de Juan Camilo Maldonado."En la serranía no Brilla el Oro". *El espectador*. sábado 5 de enero de 2008

¹³ Esta práctica, implementada por el ejército nacional como estrategia de terrorismo de estado, salta al escenario publico en 2008 con el nombre de "falsos Positivos" bajo esta modalidad la fuerza pública ha asesinado a miles de civiles y posteriormente los han presentado falsamente como guerrilleros muertos en combate. La mayoría de estos casos se encuentran en la más absoluta impunidad y muchos de estos fueron negados reiteradamente por el estado incluso por el hoy presidente Juan Manuel Santos.

¹⁴ Este ha sido un programa del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el cual daba cuantiosos subsidios a grandes industriales para implementar este tipo de

monocultivos, la desviación de fondos y los manejos amañados en relación con el aporte de estos industriales a la reelección presidencial han configurado un escándalo público reciente en el país.